



**AMPARO DIRECTO**  
**DA-66/2020 (DA-1485/2020).**

## QUEJOSA:

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**\*\***

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**SECRETARIO EN FUNCIONES  
DE MAGISTRADO:  
LUIS CARLOS VEGA MARGALLI**

**SECRETARIO:**  
JESÚS ALBERTO VARGAS  
HERNÁNDEZ

Ciudad de México. Acuerdo del Décimo  
Primer Tribunal Colegiado en Materia  
Administrativa del Primer Circuito,  
correspondiente a la sesión ordinaria por  
videoconferencia de veintitrés de septiembre de  
dos mil veintiuno.

# VISTOS;

**Y,**

## RESULTANDO:

**PRIMERO.** Por escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales

***“III. AUTORIDAD RESPONSABLE.***

#### ***IV. Acto Reclamado.***

**SEGUNDO.** La parte quejosa estimó violado su perjuicio los derechos fundamentales estos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal; asimismo, narró los antecedentes del asunto.

**TERCERO.** Recibida la demanda y los autos respectivos, por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte, el Presidente de este



**DA-66/2020**

**CCJ/ST/644/2020**, el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el dieciocho de febrero del mismo año, se autorizó al licenciado Luis Antonio Morales Ayala para desempeñar funciones de magistrado, con efectos a partir del dieciocho de febrero de la citada anualidad y hasta en tanto lo determinara dicha Comisión o el Pleno referido adscribiera magistrado que integre este Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en consecuencia se ordenó retornar el presente asunto para los efectos legales conducentes.

**SÉPTIMO.** Mediante oficio **CE./O13/1760/2020**, de trece de mayo de dos mil veinte, emitido por el Secretario de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que se dejó sin efectos el acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del citado Consejo, relativo a la autorización del licenciado Luis Antonio Morales Ayala para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito en este Tribunal, y se autorizó al Secretario de Tribunal licenciado Luis



**DA-66/2020**

## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Carlos Vega Margalli para ejercer dichas funciones a partir del catorce de mayo del mismo año, en términos de lo dispuesto por los artículos 26, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

**OCTAVO.** En sesión de diecinueve de agosto de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la comisión temporal del Magistrado José Luis Cruz Álvarez a este órgano jurisdiccional, en la plaza de la que es titular el Magistrado Urbano Martínez Hernández, con efecto a partir de uno de septiembre del año en cita y mientras subsistan las condiciones que motivan su comisión temporal.

**NOVENO.** La presente resolución se emite en el contexto de la reanudación de actividades ordenada mediante el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de Plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue prorrogada por los diversos



## CONSIDERANDO:

**SEGUNDO.** El juicio constitucional fue promovido por quien cuenta con legitimidad para ello, toda vez que la autoridad responsable reconoció a \*\*\*\*\* como representante legal de \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , tal como se puede apreciar del proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve de los autos del juicio de nulidad.

**TERCERO.** El juicio de amparo es oportuno, toda vez que la sentencia reclamada se notificó, por boletín jurisdiccional, a la parte quejosa el **once de diciembre de dos mil diecinueve** (foja



**DA-66/2020**

205 del juicio de nulidad), y el escrito de demanda se presentó el **veintiuno de enero de dos mil veinte** (foja 3 del sumario constitucional), haciéndose notar que del catorce al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, uno, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de enero de dos mil veinte, fueron días inhábiles.

**CUARTO.** El acto reclamado de la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es cierto, toda vez que en el expediente relativo al juicio de nulidad \*\*\*\*\* , obra la sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil veinte (foja 187 a 203), cuyos puntos resolutivos son:

**“PRIMERO.-** La parte actora no acreditó los extremos de su pretensión; por consiguiente,

**SEGUNDO.- SE RECONOCE LA VALIDEZ de las resoluciones impugnadas, en atención a los fundamentos y motivos expuestos en esta sentencia.”.**

**QUINTO.** El Secretario en funciones de Magistrado ponente, por conducto del Secretario de Tribunal, reparte a los integrantes del Pleno, reproducción de la demanda de amparo, del

**SEXTO.** Contra la sentencia reclamada, la quejosa formula diversos argumentos, los cuales serán abordados en un orden distinto al propuesto en virtud de la prelación lógica necesaria para su tratamiento y por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo.

Para sustentar lo anterior, por una parte, refiere que es absurdo que la juzgadora haya determinado que la información solicitada por la





**DA-66/2020**

## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

autoridad no es de difícil obtención, ya que forma parte de su contabilidad y, por ende, que tenía la obligación de conservarla.

Al respecto, niega que la información y documentación que le fue requerida forme parte de su contabilidad, pues afirma que no todos esos datos forman parte de esta última.

Explica que, de conformidad con el artículo 28, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 33 de su reglamento, la contabilidad se integra por sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de disposiciones fiscales.

Indica que dicha información, si bien puede obtenerla de su contabilidad, lo cierto es que no pueden considerarse que formen parte de ésta, ya que se trata de integraciones especiales.

Señala que se le solicitó documentación e información que forma parte de la contabilidad de terceros (sin especificar en concreto a cuál se refiere) y apunta que no cuenta con esos datos por no ser propios.

Dice que la autoridad fiscal también requirió se realicen diversos cruces de información y se proporcione gran cantidad de información relacionada con la totalidad de las operaciones efectuadas en un ejercicio fiscal, lo cual implica una gran carga administrativa.



**DA-66/2020**

## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Añade que la autoridad fiscal debe requerir la documentación e información de los contribuyentes respetando la forma en que llevan su contabilidad, mas no imponer que le sean proporcionadas a través de integraciones especiales. Apoya este argumento en la tesis **VIII-TASS-2**, de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, intitulada: “**CONTABILIDAD, EL CONTRIBUYENTE NO ESTÁ OBLIGADO A PRESENTARLA ANTE LA AUTORIDAD FISCAL EN FORMA DE INTEGRACIONES ESPECIALES.**”, así como en lo resuelto en el juicio de nulidad **\*\*\*\*\***, por la Segunda Sala Regional Metropolitana de ese órgano jurisdiccional.

Por otra parte, argumenta que es incorrecta la postura de la responsable, relativa a que la posibilidad de obtener la prórroga en términos del artículo 53 del Código Fiscal de la Federación sólo procede cuando le es solicitada información y documentación que no forma parte de su contabilidad, toda vez que, de admitir ese criterio, implicaría dotar a la autoridad de facultades que no tiene, según lo previsto en el artículo 42 del

De los argumentos sintetizados se advierte







*obtener la revocación de la sentencia recurrida.”.*

Por otra parte, resulta **inoperante** el planteamiento precisado en el inciso **b)**, ya que con esos motivos de disenso la parte quejosa controvierte aspectos que no se abordaron en la sentencia reclamada.

En efecto, asociado con el tópicó a sí la documentación e información requerida por la autoridad demandada era de difícil obtención, la Juzgadora resolvió que se encontraban debidamente justificadas todas las negativas de prórroga solicitadas por la promovente, pues se determinó que esos datos no podían considerarse de difícil obtención al formar parte de la contabilidad de la contribuyente, la cual estaba obligada a conservarla, acorde con lo previsto en los artículos 28 y 30 del Código Fiscal de la Federación, así como en los diversos 29 y 33 de su reglamento, vigentes durante los ejercicios fiscales dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce.



**DA-66/2020**

## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Posterior a insertar un cuadro en donde especificó la información y documentación requerida, la Magistrada concluyó que lo pedido se ubica dentro de lo que debe entenderse por contabilidad o documentación comprobatoria, a lo cual arribó tomando en consideración el catálogo y elementos que integran la contabilidad.

Como se puede observar, en la sentencia reclamada no se realizó pronunciamiento en cuanto a si, al ejercer sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal debe limitarse a solicitar los documentos, datos e informes de la contribuyente respetando la manera en que lleva su contabilidad, sin solicitar esos datos en **integraciones especiales**, pues estas últimas no pueden estimarse que forman parte de su contabilidad, aun de existir la posibilidad de que puedan extraerse de la misma.

Luego, es claro que el planteamiento en estudio no es apto para conceder el amparo a la quejosa, en virtud de que la juzgadora responsable no se pronunció respecto al motivo de disenso que se formula en esta instancia y,

por tanto, se debe tener a la parte quejosa  
controvirtiendo consideraciones ajenas al fallo  
combatido.

Además, es prudente señalar, por una parte, que en el caso no opera la institución de la suplencia en la deficiencia de la queja al no actualizarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 79 de la Ley de Amparo; y, por otro lado, no se observa que la promovente haya aducido expresamente que la juzgadora omitió el estudio del argumento analizado, sino que alega cuestiones relacionados con el fondo del asunto, es decir, respecto la legalidad de las sanciones impuestas.

Resulta aplicable, por el criterio que informan, la jurisprudencia **3a./J. 16/91** y **XVII.1o. J/3**, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava y Novena Épocas, (Tomo VII, abril de 1991, página 24) y



(Tomo XII, diciembre de 2000, página 1194),  
respectivamente, de rubros y textos:

**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO COMBATEN CONSIDERACIONES NO EXPRESADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA.** Si en los conceptos de violación se hacen valer argumentos en relación a consideraciones o razonamientos que no fueron expresados o abordados en la sentencia reclamada para resolver en la manera en que se hizo en la misma, deben entonces desestimarse tales conceptos por inoperantes, puesto que con ellos no se desvirtúa la legalidad de la referida sentencia, a menos de que se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja.”.

Aunado a lo anterior, la quejosa no formula argumentos encaminados a demostrar qué

De igual forma, tampoco se puede asumir que la información requerida a la quejosa no forma parte de su contabilidad sólo por haberse solicitado a través de lo que denomina “*integraciones especiales*”, las cuales se entienden como documentos en donde se sintetizan datos, ya que, como lo refiere la misma promovente, aquellas se pueden elaborar a partir de los elementos que integran su contabilidad.

Misma calificativa merece el argumento pormenorizado en el inciso **c)**, ya que la quejosa se constriñe a referir que procedían las prorrogas que solicitó, en virtud de que le fue pedida





❖ La autoridad demandada no solicitó información de terceros, sino que en todos los requerimientos, peticionó datos de los servicios que prestó y recibió la quejosa, los cuales –desde la perspectiva de la juzgadora- razonablemente se encuentran en la documentación comprobatoria que le fue pedida.

❖ En lugar de indicar en todas sus solicitudes que “...los informes, datos y documentos solicitados por esa H. Administración mediante el oficio de referencia, representan una cantidad significativa de información y documentación que para ser recabada, analizada, integrada y proporcionada requiere una representativa carga administrativa adicional por parte de mi mandante y es de difícil obtención por ser de ejercicios anteriores...”, la promovente debió informar si contaba con la información requisitada, sin que sea justificación válida su antigüedad, ya que es su deber conservar la contabilidad por el periodo de cinco años, según lo establecido en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación.



**“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.**

JESUS ALBERTO VARGAS HERNANDEZ  
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e0.5e  
03/03/23 09:08:28





**DA-66/2020**

las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado.”.

Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido que la quejosa califica como absurdo que la responsable se haya limitado a resolver que las prórrogas que solicitó no eran procedentes porque la información y documentación requisitada formaba parte de su contabilidad, por lo que, de aceptar este criterio, haría que nunca se pudiera conceder ese tipo de ampliaciones al no ser legalmente posible pedir nada que no forme parte de su contabilidad.

Sin embargo, se estima **inoperante** dicho motivo de disenso, en virtud de que, como se ha evidenciado en párrafos precedentes, la



Magistrada instructora no se limitó a justificar la legalidad de las actuaciones de la autoridad demandada desde la perspectiva que señala la promovente, sino que también la sustentó a partir otras consideraciones, como aquellas en donde resolvió que no es posible estimar de difícil obtención la información solicitada y, en consecuencia, procedentes las ampliaciones peticionadas, sólo porque implicaba la revisión de un volumen considerable de documentación; los datos solicitados no versaban sobre terceros; y se omitió informar si la documentación se encontraba en poder de éstos o, incluso, si sólo no se contaban con ellos; razonamientos que no fueron controvertidos en esta instancia; por lo que, al no ser combatidos todos los fundamentos de la sentencia reclamada, es claro que el mencionado argumento no es apto para obtener la protección constitucional solicitada.

Resulta aplicable la tesis aislada (sin número de registro) de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la



**DA-66/2020**

Federación, Séptima Época, Volumen 139-144,  
Cuarta Parte, página 26, de rubro y texto:

**“CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA.** Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya.”.

Desde diversa perspectiva, se debe calificar como **inoperante**, por **reiterativo**, el **segundo** concepto de violación, toda vez que constituye una reproducción casi literal del argumento identificado con el inciso “D” en el primer concepto de nulidad, tal como se puede apreciar del siguiente cuadro:

JESÚS ALBERTO VÁRGAS HERNÁNDEZ  
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e0.5e  
03/03/23 09:08:28



**DA-66/2020**

## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

cuando las facultades o poderes con los que cuenta un órgano administrativo hallan preestablecidos en la ley, no sólo señalado la autoridad competente para obrar, sino también su obligación de obrar y cómo debe hacerlo.

Por el contrario, estaremos frente a una facultad discrecional cuando el órgano administrativo se encuentra investido de facultades o poderes para actuar o no actuar, para obrar en una o en otra forma, para actuar cuando lo crea oportuno, o para obrar según su discreto juicio, buscando la mejor satisfacción de las necesidades colectivas que constituyen el fin de la actuación, por cuanto la ley le otorga cualquiera de esas posibilidades en forma expresa o tácita y con mayor o menor margen de libertad.

De ese modo, las facultades regladas existen cuando la norma señala consideraciones para su aplicación (informes cuyo contenido sea difícil proporcionar o de difícil obtención), las cuales obligan a la autoridad a cumplir como la Ley dispone.

Al respecto, el artículo 53, inciso c), segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación señala las consideraciones para su aplicación, al establecer cómo debe de actuar la autoridad en el caso de que se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de

Asimismo, las facultades regladas existen cuando la norma señala consideraciones para su aplicación (informes cuyo contenido sea difícil proporcionar o de difícil obtención), las cuales obligan a la autoridad a cumplir con la ley señala (sic).

Al respecto, el artículo 53, inciso c), segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación señala las consideraciones para su aplicación, al establecer cómo debe de actuar la autoridad en el caso de que se trate de informes cuyo contenido sea



*difícil obtención.*

Por lo que, contrario a lo resuelto por la Sala Responsable, el verbo “podrán” que se utiliza en el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación, NO implica una facultad discrecional, pues no ha de entenderse en el sentido de que el legislador otorgó a la autoridad administrativa la facultad discrecional de dar o no la prórroga para la presentación de la información solicitada, pues el alcance de la norma no radica en el significado puramente gramatical que se le pide al término aludido.

*Refuerza lo anterior por analogía la siguiente tesis admitida por los Tribunales Colegiados de Circuito:*

**“FACULTADES REGLADAS.  
LA NORMA JURÍDICA  
SEÑALA LAS  
CONSIDERACIONES PARA  
SU APLICACIÓN.” (...).**

Como esa H. Tribunal podrá advertir de la tesis anteriormente expuesta las facultades reglamentarias tienen la característica de señalar las consideraciones para su aplicación, consideraciones que de cumplirse obligan a la autoridad a cumplir con lo establecido en la norma.

De ese modo, tal y como en la especie sucede, el término “podrán” del segundo párrafo, del inciso c), del artículo 53 del Código Fiscal de la





**DA-66/2020**

## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Código Fiscal de la Federación no ha de entenderse en el sentido de que el legislador otorgó a la autoridad administrativa la facultad discrecional de otorgar o no la prórroga en caso de que se solicite información o documentación de difícil obtención, pues el alcance de la norma no radica en el significado puramente gramatical que se le pide al término aludido, sino del resultado que se obtiene del examen relacionado con la naturaleza de las facultades conferidas a la autoridad hacendaria.

Por el contrario, la norma determina una facultad reglada que señala las consideraciones para su aplicación, es decir, si se solicita una prórroga por el requerimiento de información de difícil obtención, se cumple la condición por lo que la autoridad fiscalizara (sic) se encuentra obligada a otorgarla.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa y contrario a lo sostenido por la autoridad, la misma debió de haber otorgado la prórroga solicitada por la quejosa en el entendido que se le requirió información de difícil obtención, por lo que se actualizó el supuesto de la facultad reglada de la autoridad.

*Por lo que, tal y como se demostrará en los siguientes*

Federación no ha de entenderse en el sentido de que el legislador otorgó a la autoridad administrativa la facultad discrecional de otorgar o no la prórroga en caso de que se solicite información o documentación de difícil obtención, pues el alcance de la norma no radica en el significado puramente gramatical que se le pide al término aludido, sino del resultado que se obtiene del examen relacionado con la naturaleza de las facultades conferidas a la autoridad hacendaria.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa y contrario a lo sostenido por la Sala responsable, la autoridad debió de haber otorgado la prórroga solicitada por la quejosa en el entendido que se le requirió información de difícil obtención, por lo que se actualizó el supuesto de la facultad reglada de la autoridad.

Lo anterior, en el entendido de que la ampliación del plazo para la presentación de documentos o informes de difícil obtención, es un beneficio que el legislador otorgó a los contribuyentes por ser quienes enfrentan la situación de dificultad para la obtención de lo requerido, por lo que afirma que sólo la autoridad puede a su arbitrio hacer uso de esa facultad, implicaría restringir el derecho que la ley concede a (sic) en beneficio de los obligados.

Lo anterior, en el entendido de que la ampliación del plazo para la presentación de documentos o informes de difícil obtención, es un beneficio que el legislador otorgó a los contribuyentes por ser quienes enfrentan la situación de dificultad para la obtención de lo requerido, por lo que afirma que sólo la autoridad puede a su arbitrio hacer uso de esa facultad, implicaría restringir el derecho que la ley concede en beneficio de los obligados.

Así las cosas, al haberse demostrado que las resoluciones impugnadas son violatorias de los derechos fundamentales y garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que la Sala responsable aplica indebidamente las disposiciones en la sentencia reclamada, lo procedente será que ese H. Tribunal Colegiado conceda a mi mandante el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto de que se revoque la sentencia reclamada, y en su



que no se ejerce de forma arbitraria, sino que le impone la obligación de plasmar un juicio de valorización en el que, apreciando las peculiaridades y condiciones del caso concreto, determine la procedencia de la medida citada, dentro del marco de referencia previsto por la ley, el cual únicamente alude en relación a que los documentos requeridos se traten de informes cuyo contenido resulte difícil de proporcionar o de difícil obtención.

Asimismo, destacó que la Sala del Máximo Tribunal señaló expresamente que el otorgamiento de la prórroga no constituye un derecho exigible por el contribuyente, sino una potestad de la autoridad fiscal; de ahí que consideró irrelevante que la promovente haya expuesto razones por las que estimó debió otorgársele las ampliaciones solicitadas, pues al final la carga de justificar fundada y motivadamente por qué no se concedió recae en la autoridad fiscal.

Con base en esas ideas, por una parte, concluyó que la interpretación que debe darse al







el crí  
2/2008  
prema  
n el Se  
eta, No  
ágina 3

PERANT  
AQU  
I LITER  
VIC  
S COM  
RECURRE  
de Amp  
sarán  
o sente  
arán las  
s en

**“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.** Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, en el recurso de revisión se expresarán los agravios que cause la resolución o sentencia impugnada, esto es, se cuestionarán las consideraciones jurídicas sustentadas en la determinación judicial que se estime contraria a los intereses del recurrente. En ese sentido, son inoperantes los agravios cuando sólo reproducen, casi



lo cual debe ser plenamente justificado por la exactora.

En mejores palabras, la actualización de la consecuencia legal prevista en la norma (ampliación del término) no requiere la satisfacción de requisitos legales fijos y específicos, sino que está en función del análisis realizado por la autoridad fiscal en el que, apreciando las particularidades del caso concreto (si los documentos requeridos se traten de informes cuyo contenido resulte difícil de proporcionar o de difícil obtención), determinará la procedencia o no de la ampliación del término solicitado.

Tomando en cuenta las consideraciones previamente sintetizadas, se debe calificar de **inoperante** el argumento planteado en una parte del **tercer** concepto de violación, específicamente, el relativo a que, acorde con el criterio **15/2017**, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, de rubro: ***“MULTA POR IMPEDIR EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN, A JUICIO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL NO PROCEDE CUANDO EL***



**DA-66/2020**

En otra línea argumentativa, a través del **primer** concepto de violación, la parte quejosa aduce que la juzgadora pasó por alto que el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se actualiza sólo en el caso de que la conducta desplegada por los contribuyentes sea una total abstención, es decir, un no hacer, circunstancia que no acontece en la especie.

...n tan  
...entación  
...nte, so  
...arla, lo  
...negó a

es mo  
ntrover  
peticio  
postur  
imiento  
tambié  
sfacer

esis V  
 gional  
 Justic  
 ÓN P  
 ÓN I D  
 PAR  
 EXISTIR  
 LIMIEN





**DA-66/2020**

## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Explica que, para tener por configurada la hipótesis prevista en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación es necesario que se acredite una actitud de resistencia a cumplir con el requerimiento que se formuló al contribuyente, aspecto que no sucedió en el caso concreto.

Acota que, además de que ilegalmente la juzgadora omitió tener en cuenta el citado criterio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, existen diversos precedentes de ese órgano jurisdiccional, como las sentencias emitidas en los juicios de nulidad \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* , respectivamente, por la Séptima y Quinta, ambas Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en las que se determinó que la infracción prevista en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación no se actualiza cuando el destinatario del requerimiento solicitó una prorroga con fundamento en el diverso 53, del ese código tributario.

Sobre el tema a debate, concretamente en cuanto a la configuración de la infracción, la responsable precisó que la autoridad demandada atribuyó a la promovente, en todas las multas impuestas, la omisión de proporcionar de forma completa y dentro del plazo otorgado la documentación e información que le requirió.

Derivado de esa acotación, manifestó que la omisión de presentar completamente los datos solicitados constituye uno de los aspectos típicos de la hipótesis prevista en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en tanto que señala califica de manera expresa como infracción la conducta de “...No suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales...”, de manera que, concluyo, no debía efectuarse distinción en si el cumplimiento al requerimiento fue parcial o total, pues sólo basta que uno de los elementos falte para afirmar que existe incumplimiento susceptible de sancionarse.

En apoyo, citó la tesis **VI.A.52A** del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto



Circuito, intitulado: ***“EXHIBICIÓN PARCIAL DE DOCUMENTOS O INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA AUTORIDAD HACENDARIA. CONSTITUYE UNA INFRACCIÓN SANCIONADA POR EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.”***

Asimismo, refirió que para efectos de la configuración de la infracción analizada, no era relevante conocer si la accionante tenía o no la intención de cumplir, pues la sola falta de atención al requerimiento, como sucedió en el caso concreto, permitió la actualización de la conducta sancionada, en la inteligencia de que las prórrogas solicitadas no resultaron justificadas.

En ese contexto, además de no controvertir frontal y eficazmente las razones previamente sintetizadas en cuanto a que la presentación parcial y la inexistencia de una actitud de resistencia al cumplimiento no constituyen factores que impiden tener por configurada la hipótesis prevista en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación; este Cuerpo Colegiado no comparte la postura de la quejosa

Para corroborar tal afirmación, es necesario informar el contenido de los artículos 85, fracción I y 86, fracción I, ambos del Código Fiscal de la Federación, cuyo texto es:

*I. Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal. No suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; no proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros, o no aportar la documentación requerida por la autoridad conforme a lo señalado en el artículo 53-B de este Código.*

$$(\dots)$$

***I. De \$17,370.00 a \$52,120.00 a la comprendida en la fracción I. (...)”***





**DA-66/2020**

## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En los citados numerales se prevé que son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación, entre otras, no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; no proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros.

De ahí que, quien incurra en esa omisión se le impondrá una multa de \$17,370.00 (diecisiete mil trescientos setenta pesos, cero centavos) a \$52,120.00 (cincuenta y dos mil ciento veinte pesos, cero centavos).

El incumplimiento del mencionado deber tributario trae como consecuencia la imposición de la multa correspondiente, la cual encuentra su razón de ser en el fin primordial de castigar la conducta infractora y procurar que los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias se abstengan de no acatar con las requisiciones formuladas por las autoridades fiscalizadoras, en otras palabras, constituye una medida para



vencer las acciones de los contribuyentes tendentes a impedir que la autoridad fiscal ejerza las facultades de comprobación para conocer la situación fiscal de aquellos.

Luego, el hecho que la parte quejosa solicitara prórrogas para presentar la información y documentación que le fue solicitada, no la libera de la multa correspondiente, toda vez que, por una parte, esta sanción deriva directamente de la conducta descrita en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en el caso concreto, abstenerse de suministrar los datos e informes que legalmente le fueron exigidos; y, por otra, el admitir que la solicitud de una ampliación en el plazo para satisfacer tales prevenciones, indefectiblemente coarta la posibilidad de la autoridad de sancionar la conducta omisiva, **implicaría hacer estériles los medios coercitivos que tiene a su alcance para mitigar las acciones que obstaculicen el ejercicio de sus facultades de comprobación**, circunstancia que impactaría negativamente en su encomienda de salvaguardar el fin recaudatorio a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional.



**DA-66/2020**

## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

pues los contribuyentes podrían solicitar tantas prórrogas como lo deseen sin que la autoridad pueda sancionarlos u orillarlos a acatar lo que legalmente se les exigió.

Respalda lo anterior, por el criterio que informa, la jurisprudencia **69/2016** de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, junio de 2016, Tomo II, página 987, del orden literal siguiente:

**“MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PARA FIJAR SU MONTO POR IMPEDIR EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, DEBE ACUDIRSE AL SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, DEL PROPIO ORDENAMIENTO.** El artículo 40, fracción II, del Código Fiscal de la Federación prevé la imposición de una multa como medida de apremio dirigida a desincentivar las conductas que obstaculicen el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria, pero no señala su monto; por lo que éste debe fijarse a partir de la aplicación sistemática de dicho artículo, en relación con los diversos 85, fracción I, y 86, fracción I, del mismo ordenamiento, ya que si bien la medida de apremio aludida tiene como finalidad dotar a

la autoridad administrativa de medios coactivos que permitan el cumplimiento de sus determinaciones en aras de salvaguardar el fin recaudatorio mencionado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que el último de los indicados numerales se refiere al concepto genérico de "infracciones", dentro de las que el propio ordenamiento normativo incluye cualquier actitud que impida u obstaculice el ejercicio de las facultades de comprobación. Por tanto, se trata de una estructura normativa que no permite su apreciación aislada sino que, al contrario, lleva al órgano aplicador a realizar un enlace de sus contenidos, para hacer posible la aplicación de la medida de apremio, sobre todo porque se trata de un supuesto que afecta directamente el interés público, al tener como objeto constituirse como una herramienta efectiva para que el fisco logre el ejercicio de sus facultades de comprobación.".

Además, si la propia quejosa reconoce que fue omisa en cumplir de manera cabal (completa) con los requerimientos de información y documentación que se le efectuaron, es patente que se ubica en la conducta descrita en el 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación; por lo que fue correcto que se le impusiera la sanción económica que establece el diverso 86, fracción I, del mismo código legal.



**DA-66/2020**

A igual conclusión se debe arribar respecto a que este Tribunal Colegiado haga suyas las consideraciones asumidas en juicios de nulidad \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* , del índice de la Séptima y Quinta Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, respectivamente; en razón de que, además de no compartir las conclusiones a



las que arribaron dichos órganos jurisdiccionales, sus determinaciones no resultan obligatorias en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.

En el **cuarto** concepto de violación, la quejosa aduce que, contrario a lo determinado por la responsable, la multa máxima determinada a través del oficio \*\*\*\*\* , equivalente a \$ \*\*\*\*\* (\*\*\*\*\* \* \*\*\* \*\*\*) \*\*\*\*\* pesos, \*\*\*\*\* centavos) se encuentra indebidamente fundada y motivada.

Arguye que la juzgadora pasó por alto que, para determinar multas máximas, la exactora debió considerar todos los **elementos de individualización** previstos en el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, consistentes en: I) la reincidencia; II) uso de documentos falsos, de destrucción de contabilidad, uso indebido de información confidencial de terceros dependientes; y III) la continuidad en la comisión de las infracciones.

Refiere que para imponer el monto máximo la autoridad demandada debió exponer razonamientos lógico-jurídicos para justificar esa



**“Artículo 75.- Dentro de los límites fijados por este Código, las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente:**

**a) Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago de contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción que tenga esa consecuencia.**

**b) Tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción establecida en el mismo artículo y fracción de este Código.**

*Para determinar la reincidencia, se considerarán únicamente las infracciones cometidas dentro de los últimos cinco años.*

**II. También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos:**

**a) Que se haga uso de documentos falsos o en los que hagan constar operaciones inexistentes.**



**DA-66/2020**

## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

- b)** Que se utilicen, sin derecho a ello, documentos expedidos a nombre de un tercero para deducir su importe al calcular las contribuciones o para acreditar cantidades trasladadas por concepto de contribuciones.
- c)** Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido.
- d)** Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido.
- e)** Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad.
- f)** Que se microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, documentación o información para efectos fiscales sin cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones relativas. El agravante procederá sin perjuicio de que los documentos microfilmados o grabados en discos ópticos o en cualquier otro medio de los autorizados, en contravención de las disposiciones fiscales, carezcan de valor probatorio.
- g)** Divulgar, hacer uso personal o indebido de la información confidencial proporcionada por terceros independientes que afecte su posición competitiva, a que se refieren los artículos 46, fracción IV y 48, fracción VII de este Código.
- h)** Realizar la deducción o acreditamiento, en contravención a lo señalado en los artículos 28, fracción XXXIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta o 4o., tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

**III. Se considera también agravante, la omisión en el entero de contribuciones que**



**IV. Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma continuada.**

**V. Asimismo, se considera agravante que los contribuyentes no den cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 76, fracciones IX y XII, 76-A, 90, penúltimo párrafo, 110, fracción XI, 179, 180, 181 y 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.**

**VI. Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales de carácter formal a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor. Asimismo, cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor. Tratándose de la presentación de declaraciones o avisos cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por alguna de ellas, se aplicará una multa por cada contribución no declarada u obligación no cumplida.**

**VII. En el caso de que la multa se pague dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación al infractor de la resolución por la cual se le imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20% de su monto, sin necesidad de que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de la materia aduanera, ni cuando se presente el supuesto de disminución de la**



**DA-66/2020**

## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*multa previsto en el séptimo párrafo del artículo 76 de este ordenamiento, así como el supuesto previsto en el artículo 78, de este Código.”.*

Como se puede observar del precepto trasunto, el legislador impuso la obligación general a las autoridades fiscales de fundar y motivar las determinaciones en que impongan multas por infracciones a las leyes fiscales.

Asimismo, de manera específica, formuló un catálogo de hipótesis normativas que describen conductas que las exactoras deben tener como agravantes de la infracción a determinar, tales como la reincidencia **[fracción I]**; mal uso de información de terceros; manipulación indebida o destrucción de la contabilidad; realizar deducciones o acreditamientos en contravención a los artículos 28, fracción XXXIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta o al diverso 4, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado **[fracción II]**; omitir enterar las contribuciones retenidas o recaudadas de contribuyentes **[fracción IV]**; que la comisión de la infracción de la que se trate sea de forma continuada; y que no se dé cumplimiento a lo establecido en los artículos 76, fracciones IX y XII, 76-A, 90,

penúltimo párrafo, 110, fracción XI, 179, 180, 181 y 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta [fracción V].

Por otra parte, en la **fracción VI**, se advierte que el legislador estableció ciertas directrices que las autoridades deben seguir cuando exista concurso ideal o real de infracciones, lo cual está supeditado a la naturaleza de la obligación incumplida (formal o material) y a la forma en que se deben presentar las declaraciones o avisos tratándose de diferentes contribuciones.

Finalmente, en la **fracción VII**, se estableció el beneficio fiscal de reducir las sanciones económicas hasta en un 20% (veinte por ciento) cuando se efectúe dentro de los primeros treinta días siguientes a la fecha en que haya surtido efectos su notificación.

De acuerdo con el Diccionario panhispánico del español jurídico de la Real Academia Española<sup>1</sup>, el concepto jurídico de “**agravante**”, en el contexto del derecho administrativo, se

<sup>1</sup> <https://dpej.rae.es/lema/agravante>



**DA-66/2020**

Por otro lado, los “**elementos de individualización**” a los que hace referencia la quejosa consisten, esencialmente, en los aspectos mínimos que deben observar las autoridades administrativas al momento de imponer una sanción, como lo puede ser la gravedad de la conducta, la capacidad económica, o bien, la misma reincidencia, las cuales tienen como fin principal ponderar las circunstancias concretas de cada persona.

Es decir, funcionan como parámetros que guían el criterio de las autoridades para hacer posible que la sanción determinada puede cumplir con su objetivo, ya sea inhibir una conducta u coaccionar la realización de una actividad, y evitar que con ella se cause un daño desmedido a los particulares.



En otras palabras, cuando se verifica un **“agravante”** el efecto siempre será el de acrecentar la sanción impuesta, pues su naturaleza jurídica es ajena a fungir como referentes para sopesar las circunstancias específicas de los infractores a su favor, como los **“elementos de individualización”**, sino que su función principal es reprimir determinadas conductas mediante el castigo acrecentado a las personas.



**DA-66/2020**

## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Consecuentemente, es evidente que la quejosa parte de la falsa apreciación de que las **“agravantes”** descritas en el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación constituyen **“elementos de individualización”** y, por tal motivo, la autoridad demandada debía realizar una análisis de cada uno para determinar el monto máximo en la multa impuesta a través del oficio \*\*\*\*\* , a fin de considerarla fundada y motivada debidamente.

Tampoco es factible asumir que las directrices previstas para tratar el concurso infracciones a las leyes fiscales o, incluso, la posibilidad de reducir las sanciones económicas hasta en un 20% (veinte por ciento) por pronto pago, sean ***“elementos de individualización”***, ya que las primeras sólo constituyen reglas que debe seguir la autoridad en la imposición de multas y las segunda se traduce en un beneficio fiscal condicionado a la satisfacción de ciertos elementos; de ahí que el concepto de violación en estudio sea **infundado**.

En el **quinto** concepto de violación, la promovente aduce que es ilegal la sentencia reclamada, pues al demostrarse la ilegalidad de la multa, sí procede la devolución del pago de lo indebido e incluso tiene la obligación de constatar el derecho subjetivo que le asiste al particular y ordenar la devolución de la cantidad solicitada; tal planteamiento debe **desestimarse**, en razón de que, al no obtener el amparo solicitado, el reconocimiento de validez de las resoluciones administrativas impugnadas declarada por la Magistrada responsable debe seguir subsistiendo en sus términos, así como la determinación de que los pagos efectuados de las multas controvertidas no resultaron indebidas.

Finalmente, se estima innecesario realizar pronunciamiento expreso en torno a los alegatos formulados por la autoridad demandada, en razón de que a través de ellos no se lograría variar la conclusión alcanzada.

Apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia **P./J. 26/2018**, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la



Nación, de rubro: ***“ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.”.***

En mérito de las anteriores consideraciones,  
lo que se impone es **negar** la protección  
constitucional solicitada.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión NO  
AMPARA NI PROTEGE a \*\*\*\*\*.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* , contra la sentencia de veintinueve de  
noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el  
juicio de nulidad \*\*\*\*\* , por la  
Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala  
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de  
Justicia Administrativa.







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:  
16626743\_0084000026426534007.p7m  
Autoridad Certificadora:  
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal  
Firmante(s): 4

FIRMANTE				
Nombre:	JESÚS ALBERTO VÁRGAS HERNÁNDEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.e0.5e	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	28/09/21 23:34:40 - 28/09/21 18:34:40	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	2b a0 bd 16 fb db 8d 76 e7 21 2c 59 ec 91 4a 6d 9c d9 ac 2f d9 9a b6 de 2e 4a 50 f3 16 19 73 2c 3d f7 72 99 cd 2e 71 46 31 22 47 50 6e 1f bb ff 92 a7 9a 44 aa e9 83 3f c2 0a a3 67 98 9b 9b 5a 53 6e 09 50 5c 87 6c e6 79 a8 dd 76 14 4b a7 7e a8 c5 d9 a7 78 9e 9d 7a 43 7c 02 bc 64 b8 9c 0d ae 99 bd a8 7a 87 ed 40 2a d4 05 73 6f 86 7a 42 06 88 f5 e9 d8 fb 9e 4a a8 9c dc 3c 90 26 17 f0 c8 36 c9 96 ea a8 03 1b e6 47 55 40 f4 71 80 8a f0 37 31 40 ef c7 d1 79 40 77 47 c9 3b ad 58 80 92 c5 65 62 68 b2 0d fb 2e 42 30 25 09 72 88 74 00 10 f5 79 94 86 73 c9 cf 9f d6 86 72 ec 64 77 96 fa 59 e7 d1 33 f9 16 e0 cb 5a 1e 9e be 19 5d 7d b8 c3 25 46 0a 4f eb 92 92 af a5 2a 6f 7f 64 db bc 4a ff 3e 99 90 7c a5 42 5a 97 b5 d7 41 d9 e6 5a b5 6a 0a 05 3e 36 25 54 6f f4 78 5d bc b3			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	28/09/21 23:34:40 - 28/09/21 18:34:40			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	28/09/21 23:34:41 - 28/09/21 18:34:41			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	72820830			
Datos estampillados:	wuMR84DoL7URGJvcY5kv6v3x8VE=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	Luis Carlos Vega Margalli	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.02.34	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	29/09/21 19:07:44 - 29/09/21 14:07:44	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	a7 da 67 cd aa c6 06 50 5a 3b 1e 2b 74 bb bf 57 28 af fc 74 6e 37 98 04 2c 68 19 bc 80 1f ad 74 29 63 c6 6e 4e 10 bf 6b 15 e7 fa 11 7c 54 24 93 f2 c9 69 32 61 b3 2e 1f 65 c7 8c 9a af f3 f2 5e 7e 85 e1 ce c3 3a b4 ae 5b c7 97 14 26 cf 55 28 c8 e4 65 62 8c 59 d2 1f b7 9a 27 64 de 05 d6 36 a7 25 81 f3 29 c0 56 b4 00 24 9d 66 58 a4 b3 12 80 bd f6 4b 08 fe 87 a3 39 5d 2b ff 56 60 17 f0 92 47 14 f8 dd dd d6 6d 60 4c 99 89 73 9b 7e 31 83 ad 90 89 f1 10 7b 0b f4 d9 2b 96 77 67 85 76 10 2f a4 37 6a cc c3 4e 15 85 14 43 df bd 82 2c 1e 36 ab af 61 8e 27 4b 18 c3 da 3e 9f fc bf 6e 3b 60 2c 93 7e 18 38 21 74 1c 67 f6 6c c8 ff 1f a2 53 46 b7 ab 60 74 70 ba 3c 3e ee 3b 82 f1 b1 3f 14 6d 37 4a 8e 3e b0 36 1f 31 74 83 77 a6 09 49 9f 4d 1d ed 95 75 fb 19 9f 85 74 c5 08 8b c7			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	29/09/21 19:07:44 - 29/09/21 14:07:44			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	29/09/21 19:07:45 - 29/09/21 14:07:45			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	72997430			
Datos estampillados:	s0evbl99E+ouTP9npYtu21gzzvl=			



## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	Fernando Andrés Ortiz Cruz	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.f6.77	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	30/09/21 19:21:01 - 30/09/21 14:21:01	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	57 1f 42 38 a2 25 80 1a d7 0b 5a 55 52 d4 ef f4 a2 44 2a c4 d8 e1 23 f0 76 1b f7 b9 cc e4 bf be df c0 86 c7 84 c4 7e be 74 80 7e 41 84 08 5b ad f7 57 d9 9f 40 a0 cc 84 4b 15 52 b6 a6 00 e8 2c 28 93 2d 5d 3c a6 8a 9a e0 2d 4c c9 86 16 9f f7 30 e4 2f a1 1a 84 9f 0d fd 02 f7 e2 f5 82 88 77 96 34 f3 e9 cd 30 3d cd a7 c8 48 be a5 72 c3 78 b4 51 f3 31 de a0 3d 2f b1 bb a5 3a 17 54 28 a4 e1 2c 86 d7 eb ba 43 b4 88 4e 22 22 3f ac a4 8c 65 ce de 85 39 3e a8 44 f1 f4 ac 52 17 3f aa dd 3b 65 91 7e 61 8b 07 1e 98 37 a6 6b c9 66 63 f0 4c 66 49 40 20 cf dd 8f 70 bc 0d 48 15 60 b1 09 56 ab e2 26 84 14 7b a3 5e 01 67 97 08 07 c1 c3 b7 68 e0 5e 46 14 9f cd b1 49 73 ef a0 34 3a 6b 18 c7 70 5e 7a f5 d7 ae 80 99 a3 8f c5 39 75 16 42 ff a4 af 16 c5 42 19 b3 37 c4 01 38 55 23 e2			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	30/09/21 19:21:01 - 30/09/21 14:21:01			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	30/09/21 19:21:01 - 30/09/21 14:21:01			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	73255761			
Datos estampillados:	SFtDO59kUHEOOD1AzhK9Ua6dkoo=			





FIRMANTE				
<b>Nombre:</b>	JOSE LUIS CRUZ ALVAREZ		<b>Validez:</b>	BIEN
FIRMA				
<b>No. serie:</b>	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.01.6f.a2		<b>Revocación:</b>	Bien
<b>Fecha: (UTC / CDMX)</b>	05/10/21 03:12:45 - 04/10/21 22:12:45		<b>Status:</b>	Valida
<b>Algoritmo:</b>	RSA - SHA256			
<b>Cadena de firma:</b>	16 83 42 0d 38 c3 d4 52 2a 3f 53 11 2c 39 13 07 4e ac ab 9b cb f5 de 54 9a 54 62 93 43 30 b8 c4 61 e1 44 0e 56 d5 23 36 43 b9 0e 21 d3 51 53 94 d7 4e 2d 25 d7 6a 65 05 42 82 43 b5 ce cd ee fb dd 7c 91 3d 7e 45 5c 8c 94 5f 6d 97 d9 f8 fa a5 3d 30 c3 15 bf 9a 14 c0 30 b8 9f c6 a3 9b ec c3 31 3e 3e 32 af 1f cd 81 5b fd e8 fa f4 00 15 6c 7b e7 bd f6 c2 ed cc 75 1b f3 2f a9 db b1 f1 18 00 3b 0d c6 4e ce 2e 76 ea 1e 5c 1e 65 e9 bc 6d 2d a9 73 f7 12 10 67 0a 6c fe 95 5f fb 39 7e f6 80 7a ee 2e 2f 21 67 a9 52 a5 ca 9d 0d 21 53 d2 43 38 22 eb 03 e0 d9 a7 d6 aa c9 3d c6 20 86 17 01 dc 13 57 16 00 c1 fa 8c 46 4d fd 26 95 66 4c 20 c5 7a a4 a4 50 d1 ca 4b dc 72 27 ea 27 05 d2 e0 ab c7 30 af 05 a6 3b 28 24 b5 53 de c6 20 c1 45 af 0a 04 81 63 43 ec 2c c2 77 97 2a 77 d2 a9			
OCSP				
<b>Fecha: (UTC / CDMX)</b>	05/10/21 03:12:45 - 04/10/21 22:12:45			
<b>Nombre del respondedor:</b>	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Emisor del respondedor:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Número de serie:</b>	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
<b>Fecha : (UTC / CDMX)</b>	05/10/21 03:12:45 - 04/10/21 22:12:45			
<b>Nombre del emisor de la respuesta TSP:</b>	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Emisor del certificado TSP:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Identificador de la respuesta TSP:</b>	73882597			
<b>Datos estampillados:</b>	93V4Rty17pPWF+pWGsfFVqlqx8g=			

El licenciado(a) Jes s Alberto Vargas Hern ndez, hago constar y certifico que en t rminos de lo previsto en los art culos 8, 13, 14, 18 y dem s conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci n P blica Gubernamental, en esta versi n p blica se suprime la informaci n considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.